**CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE FISCALES
DELEGADOS DE EXTRANJERÍA**

**BILBAO
24, 25 DE FEBRERO DE 2020**

Conclusiones de las jornadas de fiscales delegados de extranjería celebradas en Bilbao los días 24 y 25 de febrero de 2020

I. ERRADICACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO EN ESPAÑA: LA NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL CONTRA EL TRABAJO OBLIGATORIO Y OTRAS ACTIVIDADES FORZADAS Y DE UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Conclusión 1

La Red de Fiscales Delegados de Extranjería considera que la elaboración del Plan Nacional contra el Trabajo Obligatorio y otras actividades forzadas que exige el Protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso necesariamente debe comprender una reforma en profundidad de nuestro Código Penal que comprenda la tipificación de los delitos de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y de imposición forzadas de actividades ilícitas o alegales, única manera de poder perseguir estas modalidades delictivas establecidas por el derecho internacional vinculante para España cuando no van precedidas de un delito antecedente de trata de seres humanos.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 2

Llamamos la atención de que las vías indirectas actualmente vigentes como la persecución de delitos alternativos (coacciones, amenazas, secuestro, etc.) o, en su caso, mediante su integración en el concepto genérico de explotación laboral (artículos 311.1. y 312.2 CP):

- a) Son patentemente ineficaces.
- b) Imposibilitan la adopción de un sistema coherente de prevención de esos delitos.
- c) Dada su inexistente relación con la actividad laboral reglada, ha quedado sustraído a la intervención directa de la Inspección de Trabajo y a la acción de los sindicatos.
- d) Imposibilitan el establecimiento de un régimen de protección integral de sus víctimas. En este sentido ha provocado dos efectos negativos: uno, la despreocupación por el fenómeno por parte de las ONG que sólo han desarrollado su ámbito de actuación en el campo de la explotación sexual y muy limitadamente en relación con la trata de migrantes; dos, la inexistencia de un sistema de protección integral de naturaleza pública.
- e) La indebida confusión entre el trabajo forzado y los delitos contra los derechos de los trabajadores impide un exacto conocimiento criminológico del fenómeno.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 3.

Debe aprovecharse la ocasión para sistematizar correctamente y actualizar la redacción de los delitos contra los derechos de los trabajadores en atención a la multiplicidad de bienes jurídicos que comprende.

En ella deberán establecerse el régimen de subtipos cualificados o agravados en el que se tomara en consideración:

- a) La explotación fundada en la discriminación de la mujer.
- b) La explotación de los inmigrantes en situación administrativa de ilegalidad (“*migrantes sin papeles*”).

Y en la que se estableciera un tratamiento específico de la responsabilidad de las personas jurídicas en la subcontratación de trabajadores sometidos a trabajos forzados.

Aprobada por unanimidad.

II. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 177 BIS Nº 11 DEL CÓDIGO PENAL. LA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA VÍCTIMA DE TRATA

Conclusión 1

Por “*víctima de trata de seres humanos*” en el sentido del art. 177 bis Núm. 11 CP se entiende una víctima judicializada, es decir, una posible víctima que se halla inmersa como tal en un procedimiento judicial.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 2

La causa de exoneración de responsabilidad de las víctimas de trata prevista en el Núm. 11 del art. 177 bis CP, debe plantearse en cualquier fase anterior a la apertura del juicio oral si está debidamente justificada su concurrencia, solicitándose el Sobreseimiento Provisional con base a lo establecido en el art. 641 de la LECrim

Aprobada por mayoría.

Conclusión 3

En caso de que el estado procesal de las causas que se siguen por el delito de trata y por los delitos cometidos por las posibles víctimas en el marco de esa situación lo permitieran, los procedimientos deberían ser acumulados y ser objeto de un sólo procedimiento, para no romper la continencia de la causa, siempre y cuando resulte conveniente para el esclarecimiento de los hechos y para la determinación de las responsabilidades procedentes, “salvo - como señala el art. 17 de la LECRIM - que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso”, debiendo determinarse cual es Órgano Judicial competente acudiendo a las normas generales (art. 18 LECRIM).

Aprobada por mayoría.

Conclusión 4

Cuando ya se han dictado una o varias sentencias firmes contra una persona que después resulta ser una víctima de trata de seres humanos, por delitos cometidos durante el periodo de explotación sufrido y en las circunstancias recogidas en el punto 11 del art.177 bis CP, o que constituyen la propia explotación, hay dos posibilidades jurídicas válidas:

- a. Acudir al **procedimiento de revisión de sentencias firmes** (art. 954 LECrim), (Interpretación expansiva del art: STS Núm.120/2012, de 1 de marzo, indica que, aunque el artículo 954 LECrim limita la

posibilidad de revisión de una sentencia firme a los casos que expresamente regula, la Jurisprudencia ha venido admitiendo una interpretación que amplía la posibilidad de revisión a otros casos diferentes en los que, sin embargo, se aprecia el mismo fundamento que concurre en aquellos que aquel precepto contempla, a los fines de lograr un adecuado equilibrio entre las exigencias de justicia y seguridad jurídica. Dentro de esta tendencia legislativa y jurisprudencial, se encuadra la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, en la que además de ampliarse formal y expresamente los supuestos en los que cabe recurso de revisión, se retocan otros).

- b. Para salvaguardar los derechos de la víctima y no agravar la situación padecida, cabría también recurrirse a la figura del **indulto**, que debería ser propuesto, incluso por iniciativa propia, de ser conocida la circunstancia descrita, por el Órgano Judicial que dictó la sentencia condenatoria contra la víctima. Ahora bien, el indulto nos sitúa fuera del ámbito jurisdiccional, en el campo de la oportunidad política, y no ofrece garantía alguna de concesión.

Ambas posibilidades pueden ser utilizadas de forma sucesiva.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 5

Para apuntalar la prueba sobre la situación de vulnerabilidad de una víctima iberoamericana de trata o de prostitución, procede remitir el mayor número de datos al punto de contacto de la red contra la trata de personas de la AIAMP para que a través del sistema Iber@ solicite un informe económico-social de la misma para su posterior aportación al procedimiento.

Aprobada por unanimidad.

Recordatorio

Dentro de las reuniones del Protocolo de lucha contra la trata de seres humanos deben plantearse y analizarse todas las cuestiones relativas al art.177.11 CP.

III. LAS INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES EN EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS

Conclusión 1

La investigación financiera es crucial para arruinar el negocio de la trata, reforzar la prueba de cargo, localizar bienes y ganancias que puedan decomisarse y detectar la presencia de delitos como el blanqueo o contra la Hacienda Pública.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 2

La plena eficacia de la investigación financiera requiere la coordinación del Fiscal con las unidades policiales especializadas en la materia, los organismos de prevención del blanqueo y con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. A los efectos de investigar un delito de blanqueo resulta asimismo imprescindible la coordinación con las secciones de delitos económicos de la Fiscalía.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 3

Es necesaria la coordinación, cooperación y el intercambio de información financiera entre los diversos países en que opere la red de trata por algún medio idóneo como magistrados de enlace, Eurojust o comunicaciones por autoridad judicial o fiscal.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 4

Los documentos contables de la red deben exhibirse en juicio a los acusados e incorporar un estudio policial sobre su contenido y, en caso de tenerlas, el significado de las claves.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 5

Debe promoverse desde un primer momento que se aporte por las unidades policiales investigadoras de trata la información bancaria de los investigados y los bienes de que sea titular con el fin de generar un indicio probatorio complementario. Todo ello sin perjuicio de que se lleven a cabo investigaciones más complejas dirigidas a acreditar un delito de blanqueo o, en su caso, contra la Hacienda Pública.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 6

Debe promoverse el embargo cautelar de las ganancias y de los efectos e instrumentos empleados para la comisión del delito nada más sean localizados. Con posterioridad se pedirá en el escrito de acusación el decomiso de tales ganancias y bienes.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 7

El decomiso en el delito de trata debe incluir el dinero que se haya obtenido la explotación, así como los, vehículos, clubs de alterne y pisos que se empleen para la explotación o se hayan adquirido con las ganancias de la explotación.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 8

Para la efectividad del decomiso ampliado, resulta fundamental contar con un informe de la Unidad Policial investigadora que resalte que el acusado venía dedicándose desde hacía tiempo a la actividad por la que en fin fue condenado, que el bien cuyo comiso se intenta haya sido adquirido durante ese periodo de tiempo en que el condenado se venía dedicando, en términos de sospecha racional, a la actividad delictiva en cuestión y que el bien a decomisar no ha tenido una financiación lícita.

Aprobada por unanimidad.

Conclusión 9

La investigación del delito de blanqueo, exige establecer, de un lado, el beneficio ilícito, que se determinará por la ausencia de justificación del origen lícito de

efectivo o patrimonio del que disponga el investigado y, de otro, el recorrido seguido por el dinero hasta incorporarse a un circuito económico. Tales aspectos deben incluirse en el escrito de acusación.

Aprobada por unanimidad.